



Revisión No. 8963/944.  
SABALO TRANSPORTACION CO.S.A.

PONENCIA DEL SR. MTRO. JOSE CASTRO ESTRADA.  
SRIO. Lic. Manuel Torres Bueno.

México, Distrito Federal.- Acuerdo del Tribunal Pleno correspondiente al día cuatro de mayo de mil novecientos sesenta y cinco.

VISTOS ; y

RESULTANDO :

PRIMERO.- Por escrito presentado el 28 de junio de 1944, ante el Juez Segundo de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa, Sábalo Transportation Co. S. A., representada por su apoderado Luis H. Samperio, solicitó la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que en seguida se mencionan:

Vo. Bo.

"El H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, el C. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y los CC. Secretarios de Estado y del Despacho de la Economía Nacional, de Hacienda y Crédito Público y de Gobernación".

Del C. Secretario de la Economía Nacional, la notificación que me hace en mi calidad de tercero interesado, por medio de la cual me obliga y sujeta a seguir el procedimiento que señalan la Ley y el Reglamento que impugnó en esta misma demanda y, al mismo tiempo me aplica ilegítimamente esos ordenamientos, notificación que aparece en los periódicos oficiales correspondientes a los días 10, 12 y 13 de junio actual, y que dice a la letra como sigue: "Secretaría de la Economía Nacional.--- Dirección General de Minas y Petróleo.- Oficina de Concesiones y Contratos Petroleros.- Aviso de solicitud de asignación de terrenos del predio "El Escolín" Papantla,

Ver., elevada por Petróleos Mexicanos. La Institución Petróleos Mexicanos ha elevado ante esta Secretaría, con apoyo en los artículos 7o. de la Ley del Petróleo de 1941 y 3 (fracción II), 10, 11 y 12 de su reglamento, una solicitud para que le sea asignada con fines de explotación y explotación petrolera, una fracción de 2,231.0979 Hs. (dos mil doscientas treinta y una hectáreas, novecientos setenta y nueve metros cuadrados) que junto con las fracciones que a continuación se describen, forman la totalidad del predio "El Escolín", Papantla, Ver. Fracciones que se excluyen de la solicitud: I.- La de 153.1239 hectáreas formada por las parcelas 7, 8, 9, 10 y 16 del propio predio "El Escolín". II.- La de 864.3611 hectáreas deslindada así: partiendo de un lugar situado sobre el lindero de "El Escolín" y sobre el camino de Coatzintla convergen los linderos de "El Escolín", "Ojital y Potrero" y "Troncones y Potrerillos", una línea de 3,207.76 metros y rumbo N.  $48^{\circ}35'20''$ E.; de aquí, otra línea de 1,307.24 metros y rumbo norte, franco; de aquí con rumbo N.,  $65^{\circ}57'$ W., hasta entroncar el lindero entre "El Escolín" y "Poza Rica"; y de aquí hacia el sur, y por todo el último lindero mencionado, hasta el punto de partida. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 12 del Reglamento, se manda publicar el presente aviso que servirá de notificación a quienes se crean con derechos a oponerse al otorgamiento de tal asignación, en los términos señalados por los artículos 58 al 66 del repetido reglamento.- Sufragio Efectivo. No Reelección. México, D. F., a 18 de mayo de 1944.- Por O. del C. Secretario, el Director General, Germán García Lozano". b) En cuanto al H. Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Reglamentaria del Art. 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, de 2 de mayo -



de 1941, publicada en el Diario Oficial de 18 de junio del mismo año. Del C. Presidente de la República y de todos los Secretarios de Estado referidos reclamo los acuerdos de expedir para su debida publicación y observancia, la citada Ley Reglamentaria del Art. 27 constitucional en el Ramo de Petróleo, por cuanto a que, especialmente con sus Arts. 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17; y 1o. y 2o. transitorios, priva ilegalmente a la quejosa de sus derechos previamente adquiridos; c) De los CC. Presidente --- Constitucional y Secretario de Estado y del Despacho de la Economía Nacional, antes mencionado, el acuerdo de expedir para su debida publicación y observancia, el Reglamento de la Ley Reglamentaria del Art. 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, Reglamento dado a los 16 días -- del mes de diciembre de 1941 y publicado en el Diario Oficial de 30 del mismo mes de diciembre, por cuanto a que, especialmente con sus Arts. 10, 11, 12, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 109, 121, 128, 129 a 135, 136, 137, 150, 166 y 175, priva ilegalmente a la quejosa de sus derechos previamente adquiridos; y d) Cada una de las autoridades señaladas como responsables, todos los efectos y consecuencias legales de los actos que les atribuye, en cuanto privan a la quejosa de sus derechos adquiridos y amparados por virtud de leyes anteriores".

SEGUNDO.- La quejosa expresó como antecedentes lo siguiente:

Según Decreto de 28 de diciembre de 1933, publicado el 26 de enero de 1934, se constituyó Petróleos Mexicanos, S. A. de C. V., designado comúnmente como Petromex, la cual estaba facultada para celebrar contratos con los particulares, para la explotación de terrenos de la zona-

petrolera concesionados a dicha empresa por el Gobierno Federal. Mediante escritura pública de 17 de octubre de 1935, adicionada por la de 7 de febrero de 1936, la Petro-mex contrató con la quejosa, concediendo a ésta el derecho de seleccionar para su explotación diez mil hectáreas de reservas petroleras nacionales concesionadas o que en lo futuro se concesionaran a la Petromex; el contrato relativo fue aprobado por el Gobierno en los términos de los artículos 5o. y 7o. del Decreto de 28 de diciembre de --- 1933 y 25 y 43 de los Estatutos de la Petromex. En el mismo contrato se concedió al promovente el derecho de construir oleoductos, terminales, etcétera. Petromex solicitó y obtuvo las concesiones especiales números uno y tres publicadas los días 23 de enero y 3 de marzo de 1936. La Sábalo aceptó 152.5000 (ciento cincuenta y dos hectáreas, cinco mil metros cuadrados) de la concesión número 3, y 7,000 (siete mil hectáreas) de la número uno, según escrituras de 17 de febrero y 2 de mayo de 1936. La extensión faltante para completar las 10,000 hectáreas, las escogió la Sábalo en escritura de 2 de mayo de 1936, sobre reservas solicitadas por Petromex, y que debían serle concedidas, pero que hasta la fecha de la demanda no habían sido otorgadas en concesión especial. En esas 10,000 hectáreas la quejosa tiene derecho de perforar pozos en las localidades que designe, y la propiedad sobre el setenta -- por ciento del petróleo obtenido. Corresponden a esa extensión, los lotes 7, 8, 9, 10, 16 y 111 de "El Escolín", con superficie de 176.7300 (ciento setenta y seis hectáreas, siete mil trescientos metros cuadrados); el excedente de la concesión número 1209 sobre la Hacienda del mismo nombre, con superficie de 864.3611 (ochocientos sesenta y cuatro hectáreas, tres mil seiscientos once metros -





cuadrados); cauce y zonas federales del Río de Santa Agueda y sus afluentes, y demás corrientes de agua de jurisdicción federal, comprendidas dentro del predio "El Escolín", con superficie de 100 hectáreas; y otras porciones del mismo predio, el cual se encuentra ubicado en el Municipio de Papantla, Veracruz. Los mencionados terrenos de "El Escolín" fueron objeto, además, de un convenio sobre explotación unitaria, aprobada por el Consejo Administrativo de la Petromex, el 22 de abril de 1944. En ese convenio se estableció que la Compañía Mexicana de Petróleo El Aguila, S. A., se desistiría de las solicitudes de concesión de terrenos solicitados también por Petromex; que no se perforarían más pozos que los indicados en el mapa relativo; que esos pozos se explotarían de modo que no produjeran más de un barril de petróleo por cada mil pies cúbicos de gas; y que los lotes de Troncones y Potrerillos se explotarían por partes iguales entre El Aguila y La Sábalo. En la notificación que hizo a la quejosa la Secretaría de la Economía Nacional, mediante el aviso publicado en los periódicos oficiales de 10, 12 y 13 de junio de 1944, se le hizo saber que Petróleos Mexicanos solicitó la asignación con fines de exploración y explotación, de una fracción de 2231.979 (dos mil doscientos treinta y una hectáreas, novecientos setenta y nueve metros cuadrados) del predio "El Escolín". En la solicitud relativa consta que Petróleos Mexicanos tiene el propósito de explorar y explotar la totalidad de dicho predio; y precisamente sobre él adquirió la quejosa los derechos señalados en párrafos anteriores, razón por la cual los actos reclamados perjudican esos derechos.

TERCERO.- Se estimaron violados los artículos 14, 16 y 27 constitucionales, por los siguientes concep-

tos de violación:

10.- La notificación señalada como acto reclamado, en que se cita a la quejosa para que concurra al procedimiento de oposición previsto por los artículos 58 y 66 del Reglamento de la Ley del Petróleo de 1941, en relación con la mencionada solicitud de Petróleos Mexicanos, obliga a la agraviada a sujetarse al Reglamento y a la Ley del Petróleo vigentes entonces. De sujetarse al trámite de dicha oposición, la quejosa sufriría la pérdida de sus posesiones y derechos, porque tales ordenamientos los modifica y aun anula, impidiendo su defensa. Por tanto, la notificación aludida que se reclama del Secretario de la Economía Nacional, sujeta a la quejosa a una ley y a un reglamento anticonstitucionales que la privan de sus derechos y posesiones.

20.- La Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo de Petróleo de 2 de mayo de 1941, publicada el 18 de junio siguiente, introduce un nuevo sistema para la exploración y explotación petroleras. El artículo 10. transitorio de dicha ley previene que las concesiones expedidas de conformidad con la ley de 26 de diciembre de 1925 y sus reformas de 3 de enero de 1928, seguirán sujetas a las normas legales conforme a las cuales fueron otorgadas; pero no existe precepto semejante respecto de las concesiones expedidas o que deban expedirse conforme al Decreto de 28 de diciembre de 1933, por lo que debe entenderse que respecto a estas últimas el mencionado ordenamiento se aplica retroactivamente, en perjuicio de los derechos que tiene la quejosa sobre las diez mil hectáreas que contrató al amparo de dicho decreto. Los artículos 60., 70., 80., 90., 10, 12, 14, 15, 16 y 17 de la mencionada ley establecen modificaciones a la forma



de explorar y explotar los recursos petroleros, como son: La realización de los trabajos relativos requieren autorización expresa del Ejecutivo Federal. Se autoriza el sistema de asignaciones, como la que pretende hacerse a Petróleos Mexicanos. Los contratos con particulares deben celebrarse con sujeción a los requisitos previstos en la propia ley. Tales contratos tendrán como duración máxima treinta años, se referirán a una superficie continua y se rán intransmisibles. Sólo podrá contratarse a este respecto con particulares mexicanos o con sociedades constituidas íntegramente por éstos, y no con sociedades anónimas con acciones al portador. Se enumeran las causas de caducidad de una concesión entre las que se encuentra el traspaso total o parcial a persona que no satisfaga los requisitos mencionados. Las asignaciones y contratos pueden ser cancelados por la Secretaría de Economía en los casos que determina el Reglamento. Por otra parte, los derechos de la quijosa se encuentran protegidos por los artículos 1796, 1797 y 1832 del Código Civil. Al desconocerse estos derechos por la ley impugnada, se priva de ellos a la quijosa sin juicio seguido ante los tribunales en que se observen las leyes expedidas con anterioridad. Por consiguiente, la aplicación retroactiva de la ley reclamada, infringe la garantía consagrada en el artículo 14 Constitucional, por parte del Secretario de la Economía Nacional.

30.- El Reglamento de la Ley del Petróleo de 2 de mayo de 1941 establece un nuevo sistema para la explotación y explotación petroleras; y aunque en su artículo 30, dice que los terrenos destinados a ellas se dividen en cinco grupos, uno de los cuales está formado por terrenos amparados por concesiones otorgadas conforme a leyes-

anteriores, ese precepto sólo se refiere a las concedidas con sujeción a la ley del 26 de diciembre de 1925. Por tanto, dicho reglamento se aplica en forma retroactiva a la quejosa en relación con los derechos que adquirió conforme al Decreto de 28 de diciembre de 1933. Esta aplicación retroactiva viola de manera manifiesta el artículo 14 constitucional, especialmente por lo que ve a los artículos 30., 71, 72, 73, 74, 75, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 109, 121, 128, 136, 137, 150, 166 y 175 del Reglamento combatido, porque ninguno de ellos excluye las concesiones otorgadas o que deban otorgarse al amparo del mencionado Decreto de 28 de diciembre de 1933; y porque los derechos adquiridos por la quejosa con base en él, sufren modificaciones substanciales que llegan hasta su anulación total al fijar nuevo término, reglas y condiciones para la explotación petrolera.

4o.- Los actos reclamados violan el artículo 16 constitucional, porque molestan a la quejosa en la posesión de sus derechos, sin escrito de autoridad competente que funde su causa legal, por los mismos conceptos expresados respecto del artículo 14 constitucional.

5o.- Violación del artículo 27 constitucional.- Dicho precepto dispone que las expropiaciones sólo podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización; y en el caso la quejosa no ha sido expropiada de los contratos ni de los derechos tantas veces mencionados, por lo que los actos reclamados son inconstitucionales ya que no existe en el caso utilidad pública ni la indemnización correspondiente.

CUARTO.- El Juez de Distrito dió entrada a la demanda, bajo el número 645/944; y seguido el juicio por sus trámites legales dictó sentencia el siete de octubre





de 1944, en que sobreseyó el juicio.

Las razones invocadas por el Juzgador para sobreseer, en síntesis dicen:

Afirman las responsables que el amparo es improcedente por lo que ve a la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo de Petróleo y a su Reglamento, porque contra esos ordenamientos quejosos interpuso anteriormente dos juicios de garantías que se encuentran pendientes de revisión en la Suprema Corte de Justicia. De las copias certificadas que acompañó a su informe justificado el Secretario de la Economía Nacional, se desprende con evidencia que en los juicios acumulados 46/942 y 224/942 del Juzgado Primero de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa, la quejosa reclamó del Presidente de la República del Secretario de la Economía Nacional, el acuerdo de expedir para su debida publicación y observancia, el reglamento de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo del Petróleo, de 2 de mayo de 1941, así como los efectos y consecuencias de dicho Reglamento; y que en diverso amparo 802/941 seguido ante el Juzgado del conocimiento, la quejosa reclamó del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos la mencionada Ley Reglamentaria, y del Presidente de la República y Secretarios de Economía Nacional, Hacienda y Crédito Público y Gobernación, los acuerdos de expedir la mencionada ley para su publicación y observancia así como los efectos y consecuencias de la misma. Dichos amparos se encuentran pendientes de que se resuelva el recurso de revisión correspondiente ante la Suprema Corte de Justicia. En esos juicios se reclaman los mismos actos que en el presente, y por consiguiente este último resulta improcedente en los términos de la fracción III del artículo 73-

de la Ley de Amparo y debe sobreseerse respecto de dichos actos, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la misma ley.

Es también improcedente el amparo por lo que hace a la publicación de la solicitud de Petróleos Mexicanos, para que se le asignen los derechos del predio "El Escolín", puesto que con dicha publicación no se resuelve nada acerca de esa solicitud, y sólo se hace con el fin de darla a conocer a los interesados, para que se opongan a la concesión pedida si lo juzgan conveniente. Con ese acto no se afectan los intereses de la quejosa, afectación que sólo se produciría cuando se otorguen las concesiones pedidas; y por consiguiente la mencionada publicación se encuentra en el caso previsto por la fracción VI del artículo 73 de la Ley de Amparo, por lo que debe sobreseerse al respecto, con fundamento en la fracción III del artículo 74 de la misma ley.

QUINTO.- Inconforme la empresa quejosa con la anterior sentencia, interpuso en su contra el recurso de revisión, que fue admitido por el Presidente de esta Suprema Corte, en proveído de nueve de noviembre de 1944.

El Agente del Ministerio Público Federal solicitó se confirme la resolución recurrida y se sobresea el juicio.

Por acuerdo del propio Presidente, de 4 de marzo de 1958, se turnó el asunto al Ministro relator.

#### C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno es competente para conocer del presente recurso de revisión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, porque se hace valer contra la sentencia dictada por un Juez de



Distrito en un amparo en que se controvierte la constitucionalidad de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo de petróleo, de 2 de mayo de 1941, publicada en el Diario Oficial el 18 de junio del mismo año.

SEGUNDO.- La empresa quejosa expresó en síntesis los siguientes agravios:

1o.- El Juzgador aplicó de manera inexacta los artículos 73, fracción III y 74 fracción III de la Ley de Amparo, porque no es exacto que exista en el caso el sobreseimiento a que se refieren dichos preceptos. Es verdad que la quejosa promovió los juicios de amparo 224/942, acumulado al 46/942, seguidos ante el Juez Primero de Distrito del Distrito Federal en materia Administrativa, y el amparo 802/941 seguido ante el Juez Segundo de Distrito de la circunscripción y materia citadas; pero en esos amparos se reclamaron leyes distintas a las combatidas en el presente juicio de garantías. En aquellos amparos no se impugnaron las disposiciones legales que fijan y regulan el procedimiento de oposición ante la Secretaría de la Economía Nacional, particularmente los artículos 12 y 58 al 66 del Reglamento de la Ley del Petróleo, disposiciones que se reclaman de manera particular en este juicio de garantías. Además, en el presente amparo se reclaman actos que no pudieron ser materia de los anteriores, porque todavía no se realizaban cuando se promovieron esos amparos. Lo que en este juicio se reclama es la "ilegítima" actuación del Secretario de la Economía Nacional, por la que priva a la quejosa de su posesión y derechos aplicándole los artículos aludidos del Reglamento de la Ley del Petróleo, que son consecuencia de esa misma ley. Tales disposiciones no tienen un principio de ejecución y, por lo tanto, no podían reclamarse en un juicio -

de amparo sino hasta que alguna autoridad las aplicara en perjuicio de la quejosa; y contra esa aplicación presente se endereza este amparo.

2o.- El Juzgador estimó asimismo improcedente - el amparo respecto de la publicación hecha por el Secretario de la Economía Nacional, de la solicitud de Petróleos Mexicanos para que se le asignaran los derechos del predio "El Escolín", aduciendo que esa publicación no afecta los intereses jurídicos de la quejosa. Con esa argumentación aplicó inexactamente los artículos 73 fracción VI y 74 -- fracción III de la Ley de Amparo. Si la ley y reglamento en que se apoya la citada responsable no privaran de sus derechos y posesiones a la quejosa y le permitieran hacerlos valer en el procedimiento de oposición relativo, tendría validez la argumentación; pero el citado reclamo define quiénes son los que pueden oponerse en dicho procedimiento y excluye a los que se encuentran en el caso de la quejosa. De esa manera se desconocen a la promovente sus derechos, ya que en el procedimiento de oposición a - que se le cita no se le dara entrada. En tal virtud, es inoperante el argumento del Juzgador, y debe estimarse que el acto reclamado del Secretario de la Economía sí afecta intereses jurídicos de la quejosa. Según la argumentación del Juez de Distrito, la agraviada no puede pedir amparo porque no se afectan sus intereses jurídicos, y no podrá acudir al procedimiento de oposición que señala el reglamento de la Ley del Petróleo, porque éste la excluye de él. Y cuando Petróleos Mexicanos obtenga la concesión pedida, la quejosa tampoco podrá promover amparo, por no haberse opuesto en el procedimiento relativo, de manera - que la resolución que en ese caso dicte el mencionado Secretario sólo será consecuencia de otros actos consenti-





dos por la quejosa.

TERCERO.- En los agravios alegados por la empresa quejosa, se combaten las causales de improcedencia invocadas por el Juez de Distrito para sobreseer el presente amparo; pero por ser preponderante debe estudiarse en primer término la causal de improcedencia alegada por Petróleos Mexicanos en su carácter de tercero perjudicado, en el escrito de 4 de agosto de 1944 presentado ante el Juez del conocimiento, consistente en que la Sábalo Transportation Co., S. A., fue expropiada de sus bienes y derechos, según Decreto de 18 de marzo de 1938; en que dicha empresa está comprendida en el convenio internacional celebrado entre los Gobiernos de México y los Estados Unidos de Norteamérica, relativo a los bienes expropiados; y en que por consiguiente los derechos que reclama dicha empresa en el presente amparo no están ya en su patrimonio, y los actos reclamados no afectan su interés jurídico. Esta causal de improcedencia no fue analizada por el Juzgador; y Petróleos Mexicanos, en escrito presentado ante esta Suprema Corte el 17 de febrero de 1965, solicita nuevamente que se tome en consideración. En este último escrito Petróleos Mexicanos alega lo siguiente: el 15 de enero de 1942 se publicó en el Diario Oficial el Decreto que promulgó el convenio celebrado por México con los Estados Unidos de Norteamérica, para el pago de indemnizaciones a las Compañías Petroleras norteamericanas cuyos bienes fueron expropiados. En el punto primero de la nota 5623 enviada por el Encargado de Negocios de México, Rafael de la Colina, al Secretario de Estado del Gobierno Norteamericano, Cordell Hull, se dice que de acuerdo con el dictamen conjunto presentado el 17 de abril de 1942 por los peritos designados por los respectivos gobiernos, el de Mé-

xico pagará al de los Estados Unidos de América la suma -  
de 23.995,991.00 (veintitrés millones novecientos noventa  
y cinco mil novecientos noventa y un) dólares, más los in-  
tereses correspondientes. En este dictamen, que fue pu-  
blicado en el Diario Oficial el 31 de diciembre de 1945, -  
aparece que de la cantidad aludida corresponden 987,671.00  
(novecientos ochenta y siete mil seiscientos setenta y --  
un) dólares al grupo de la Sábalo. El punto tercero de -  
ese dictamen indica que el Gobierno de México y cada una-  
de las empresas reclamantes deberán liberarse mútua y res-  
pectivamente de todas las reclamaciones recíprocas que aún  
puedan existir entre ellas, con excepción de las que aquél  
tenga en contra de éstas por concepto de impuestos o dere-  
chos no pagados, y por pagos legalmente hechos por el Go-  
bierno de México por cuenta de dichas compañías. El pun-  
to tercero del Decreto de 15 de enero de 1945 dice que --  
las cantidades que el Gobierno de México pague a las em-  
presas expropiadas constituirán la liquidación total y de  
finitiva de todas las reclamaciones que éstas tengan con-  
tra el Gobierno de México. En estas condiciones es evi-  
dente el cambio de situación jurídica que trae por conse-  
cuencia el sobreseimiento del juicio, de conformidad con-  
lo dispuesto por las fracciones XVI y XVII del artículo -  
73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III -  
del 74 de la propia ley.

A éste respecto es pertinente analizar la legis-  
lación relativa, incluyendo los convenios celebrados en-  
tre México y los Estados Unidos de Norteamérica sobre el  
problema del petróleo, que han venido a formar parte de -  
la Ley Suprema de la Unión, en los términos de la primera --  
parte del artículo 133 de la misma; El Decreto de Expro-  
piación de los bienes y derechos pertenecientes a las com



pañías petroleras, de 18 de marzo de 1938, publicado en --  
 el Diario Oficial del día 19 siguiente, en su artículo --  
 1o. enumera las compañías expropiadas entre las que se --  
 menciona a la quejosa. El Gobierno de México celebró un-  
 Convenio con el de los Estados Unidos de América, sobre --  
 el problema petrolero, el 19 de noviembre de 1941, El --  
 Ejecutivo Federal promulgó el Decreto de aprobación del --  
 Senado el 7 de enero de 1942, el cual se publicó en el --  
 Diario Oficial el 28 del citado enero. El 15 de enero de  
 1945, se publicó el Decreto que promulgó el Convenio cele-  
 brado entre ambos países, para el pago de la indemniza-  
 ción a las compañías petroleras norteamericanas expropi-  
 das; el mandato de promulgación del Ejecutivo está fecha-  
 do el día 4 del propio enero. Este último convenio con-  
 tiene las notas cambiadas en la ciudad de Washington el -  
 25 y 29 de septiembre de 1943, entre el Secretario de Es-  
 tado de los Estados Unidos de América, Cordell Hull, y en-  
 Encargado de Negocios de México, Rafael de la Colina, en-  
 las que el Gobierno de México está de acuerdo con el de -  
 los Estados Unidos de América en considerar que las pro-  
 pias notas constituyen el convenio a que se refiere el pá-  
 rrafo dieciséis del convenio de 19 de noviembre de 1941.-  
 El punto tercero de las mencionadas notas, en la versión-  
 castellana, dice: "3.- Las sumas totales que el Gobierno-  
 de México pagará en esta forma, las cuales no estarán su-  
 jetas a deducciones por concepto de impuestos o reclama-  
 ciones de ningún género, constituirán el pago y la liqui-  
 dación totales y definitivos de todas las reclamaciones -  
 en contra del Gobierno de México por parte de las compa-  
 ñías respectivas mencionadas en el Dictamen Conjunto del-  
 17 de abril de 1942....."

Este último Convenio referente al pago de las-

indemnizaciones fue aprobado por el Senado de la República por Decreto que se publicó en el Diario Oficial el 27 de noviembre de 1944.

En relación con el Convenio de 19 de noviembre de 1941 la Cámara de Senadores dictó acuerdo el 18 de diciembre de 1945, en el sentido de que no es necesario --- aprobar por separado el Dictamen conjunto emitido por los peritos nombrados por los dos países, en vista de que ese dictamen debe estimarse como formando parte del propio -- Convenio y del de 25 y 29 de septiembre de 1943, instrumentos que el Senado ya aprobó.

El Dictamen de referencia se publicó en el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1945; en él los peritos fijaron de común acuerdo el valor de los bienes expropiados a las compañías petroleras, especificando lo correspondiente a cada grupo, y en la parte relacionada con este asunto el avalúo relativo dice: "Grupo de la Sábalo... Dls. 897,671; Sábalo Transportation Co., Cía. Petrolera - "Clarita", S. A., Cía. Petrolera Cacalilao, S. A."

El punto tercero de ese mismo Dictamen dice: --

"TERCERO.- El Gobierno de México y cada una de las citadas reclamantes deberán liberarse mutua y respectivamente de todas las reclamaciones recíprocas que aun-- pueden existir pendientes entre ellos, con excepción de -- aquéllas del Gobierno de México en contra de las Compa--- ñías por impuestos, o derechos no pagados, y todas aque-- llas otras basadas en pagos legalmente hechos por el Go-- bierno de México, por cuenta de dichas Compañías....."

De todo lo anterior aparece que la Sábalo Transportation Co. S. A., es una de las empresas comprendidas en el Decreto expropiatorio; que todos los bienes y derechos de la misma fueron objeto de la indemnización que se





estipuló en los convenios internacionales aludidos y que con la expropiación y con el pago de la indemnización se extinguieron todos los derechos que la mencionada empresa pudiera tener.

Ahora bien, la demanda de amparo en este asunto se presentó ante el Juez del conocimiento el 28 de junio de 1944, y si entonces la quejosa pudo invocar algunos derechos, después de haberse celebrado los convenios internacionales de referencia y de haberse fijado el monto de la indemnización y la forma de pago de la misma, debe estimarse que cambió la situación jurídica de la agraviada y que se extinguieron los derechos que pudo hacer valer ante el Gobierno de México, por lo que se encuentra indudablemente el de oponerse al procedimiento fijado por la Ley y el Reglamento impugnados en su demanda de amparo, para tramitar la solicitud de asignación de parte del predio "El Escolín", reclamada por Petróleos Mexicanos. En estas condiciones es inconcuso que la Sábalo Transportation Co. S. A., carece de interés jurídico para promover el presente amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción V del artículo 73 de la Ley relativa. En tal virtud, existiendo en el caso la citada causal de improcedencia, procede confirmar el sobreseimiento dictado por el Juez de Distrito invocando al efecto como fundamento del mismo la falta de interés jurídico de la quejosa y el artículo 74 fracción III de la Ley de la materia.

La tesis aquí sustentada, lo fue anteriormente por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en los amparos en revisión 2903/939 y 7857/944, promovidos por la empresa quejosa.

La ejecutoria dictada en el primero de ellos -- el 4 de julio de 1946, en la parte conducente dice:

"Ahora bien, como el Pacto Internacional mencionado acepta como un hecho cierto la expropiación de los bienes de la quejosa, toda vez que quedaron incluidas en los convenios y avalúos formados con motivo de la indemnización estipulada, o sea, que quedaron comprendidos entre los bienes que fueron afectados por el Decreto de 18 de marzo de 1938, lógica y jurídicamente debe concluirse que cambió la situación jurídica de la Compañía quejosa, en forma indiscutible a través del juicio de amparo, ya que por Convenio Internacional, ratificado con las solemnidades del caso, se dió fin a todos los problemas suscitados con motivo de la expropiación de las Compañías Petroleras y su ejecución; y ese Convenio, es Ley Suprema para toda la Nación, de acuerdo con el artículo 133 de la Constitución Federal. En tales términos, debe revocarse la sentencia que se revisa y sobreseerse en el juicio".

La ejecutoria dictada en el segundo el diez de julio de 1946, en la parte relativa dice:

"Único.- Desde luego es pertinente hacer constar que el Juez de Distrito omitió analizar la causa de improcedencia que oportunamente hizo valer Petróleos Mexicanos en su carácter de terdero perjudicado en el presente juicio, consistente en que habiéndose celebrado un Convenio Internacional entre los Gobiernos de México y el de Estados Unidos de Norte América, en que se estipuló la indemnización que se debía de pagar a las Compañías Petroleras Expropiadas por el Decreto de 18 de marzo de 1938, entre las cuales se encuentra la quejosa, ha cambiado la situación jurídica, y por tanto procede sobreseer en el juicio. Haciendo un estudio de dicho caso de improcedencia aparece de autos que efectivamente la Sábalo Transportation Co. S. A., es una de las empresas comprendidas en el



Decreto Expropiatorio citado, por virtud del cual se le --  
 priva de la posesión material de todos sus bienes y dere--  
 chos, los cuales quedaron incluidos en el avalúo respecti--  
 vo y fueron objeto de la indemnización que se estipuló --  
 por medio de dicho Convenio Internacional, de donde se --  
 desprende que lógica y jurídicamente hay que concluir que  
 cambió la situación jurídica de la quejosa porque los re--  
 feridos bienes quedaron afectos al pago de la obligación--  
 estipulada. Este criterio lo ha aceptado ya esta Segunda  
 Sala de la Suprema Corte de Justicia en casos completamen--  
 te similares exponiendo lo siguiente: '..... el Convenio--  
 Internacional que oportunamente fue ratificado por la Cá--  
 mara de Senadores ha venido a formar parte de la Constitu--  
 ción General de la República en los términos establecidos  
 en la primera parte del artículo 133 de la misma. En con--  
 secuencia es evidente que la situación jurídica de los --  
 bienes de las Compañías quejasas en el presente juicio ha  
 cambiado, porque el Tratado Internacional con el dictamen  
 pericial respectivo, los considera como irrevocablemente--  
 expropiados y como definitivas las compensaciones que so--  
 bre ellos se determinan mediante los avalúos practicados,  
 siendo evidente que cualquiera resolución de fondo que se  
 dictara en el presente juicio, afectaría esta nueva situa--  
 ción creada por el Tratado Internacional cuya validez y--  
 constitucionalidad no han sido objeto de la controversia.  
 Por estas consideraciones, y como se ha dicho, sin necesi--  
 dad de entrar al análisis del fondo de la cuestión, debe--  
 do revocarse la parte de la sentencia que se revisa y so--  
 breseerse en el juicio'".

El sobreseimiento del presente amparo comprende  
 la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el  
 ramo de petróleo de 2 de mayo de 1941, su Reglamento pue

blicado el 30 de diciembre del año citado, y la aplicación de ambos ordenamientos a la quejosa por parte del Secretario de la Economía Nacional, mediante la notificación datada el 18 de mayo de 1944, de la solicitud de asignación de terrenos del predio "El Escolín", Papantla, Veracruz, presentada por Petróleos Mexicanos; pues aunque el Reglamento y notificación mencionados se reclaman por vicios propios, no es necesario en el caso reservarlos al conocimiento de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en virtud de haberse establecido en términos absolutos y generales que la quejosa fue expropiada en todos sus bienes y derechos, de los que fue indemnizada totalmente, conforme a los convenios internacionales a que se hizo mérito. Por consiguiente, si la agraviada carece de interés jurídico para promover el presente amparo, no puede restringirse el sobreseimiento exclusivamente a la ley reclamada, porque la presente ejecutoria incurriría en incongruencia al establecer, por otra parte, que la propia quejosa estaba facultada para reclamar ante la Segunda Sala la inconstitucionalidad del Reglamento y notificación aludidas. Esta incongruencia podría dar lugar a una resolución contradictoria, en el supuesto de que la Segunda Sala estimara procedente el amparo respecto de los mencionados actos reclamados. Establecida la falta de interés jurídico de la agraviada, con base en los convenios internacionales citados, reservar a la Segunda Sala de esta Suprema Corte el conocimiento del asunto para que declarara el sobreseimiento del mismo respecto del Reglamento y notificación mencionados, sería un trámite puramente formulista, contrario al principio de la economía procesal, así como a los principios de congruencia interna de toda sentencia y de no contradicción entre los fallos dictados por esta Su





prema Corte funcionando en Pleno o en Salas.

En atención a todas las precedentes consideraciones, resulta innecesario estudiar los dos agravios alegados por la quejosa en la revisión, porque las causales de improcedencia en que fundó el Juez de Distrito el sobreseimiento del juicio, que se combate en esos agravios, carecen de importancia ante la absoluta falta de interés jurídico de la agraviada en los términos ya expuestos. En efecto, en el primer agravio se pretende demostrar que en los diversos juicios de amparo 224/949, acumulado al 46/942, y en el 802/941, promovidos por la misma quejosa, no se reclamaron las disposiciones que fijan y reglamentan el procedimiento de oposición ante la Secretaría de la Economía Nacional, particularmente los artículos 12 y 58 al 66 del Reglamento de la Ley combatida; y en el segundo se pretende demostrar que la Ley y Reglamento reclamados desconocen o nulifican los derechos legítimamente adquiridos por la quejosa y que en esas condiciones se le llama a un procedimiento de oposición del que está excluida por disposición de esos ordenamientos. Sería ocioso analizar esas cuestiones de improcedencia, una vez que se ha puesto de manifiesto que la quejosa carece de interés jurídico para promover el amparo, ya que todos sus bienes y derechos le fueron expropiados y recibió por ellos la indemnización correspondiente.

Por todo lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 103, fracción I y 107 fracción VIII, inciso a) de la Constitución Federal; 84 fracción I, inciso a); 90 y 91 de la citada Ley del Juicio de Garantías, se resuelve:

UNICO.-- Se confirma el primer punto resolutivo del fallo recurrido; y por consiguiente se sobresee el --

presente juicio de amparo promovido por la Sabalo Transportation Co., S. A., contra la expedición de la Ley Reglamentaria del artículo 27 constitucional en el Ramo de Petróleo, de 2 de mayo de 1941, en sus artículos 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, y 10. y 20. Transitorios, que se reclama del Congreso de la Unión; la promulgación, refrendo y publicación de esa misma ley por parte del Presidente de la República y Secretarios de la Economía Nacional, Hacienda y Crédito Público y Gobernación; la expedición del Reglamento de dicha Ley, de 16 de diciembre del año citado, en sus artículos 10, 11, 12, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 88, 90, 91, 92, 93, 109, 121, 128, 129 a 134, 136, 137, 150, 166 y 177, que se reclama del Presidente de la República y del Secretario de la Economía Nacional; y la aplicación y consecuencias de dichos ordenamientos, entre las que se encuentra la notificación de 18 de mayo de 1944, hecha a la quejosa por el Secretario de la Economía Nacional, para que concurra al procedimiento de oposición de la solicitud de asignación de terrenos del predio "El Escolín" de Papantla, Veracruz, presentada por Petróleos Mexicanos.

Notifíquese, con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos al Juzgado de su origen y en su oportunidad archívese el Toca.

MTB/dvg.

Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por unanimidad de diecinueve votos de los señores Ministros Iñárritu, Huitrón, Rebolledo, Tena-Ramírez, Rivera Silva, Mercado Alarcón, Gutiérrez Gutiérrez, Rojina Villegas, Rivera Pérez Campos, Martínez Ulloa, Castro Estrada, Guzmán Neyra, Padilla, Salmorán de Tamayo, Yáñez, Canedo Aldrete, Guerrero Martínez, Carvajal y Presidente Pozo. Los CC. Ministros supernumerarios José Luis Gutiérrez Gutiérrez y Ramón Canedo Aldrete integraron el Tribunal Pleno, en los términos de la parte fi-



nal del artículo 2o. de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, substituyendo, respectivamente, a los -- CC. Ministros Octavio Mendoza González y Mariano Ramírez - Vázquez, que estaban haciendo uso de licencia. Fue Ponente el Ministro Castro Estrada. Firman los CC. Presidente- y Ministros que intervinieron, con el C. Secretario General de Acuerdos, que da fe.

EL PRESIDENTE

AGAPITO AZOZ.

LOS MINISTROS

JORGE INARRITU.

ABEL HUITRON Y A.

MARIO G. REBOILLO.

FELIPE TENA RAMIREZ.

MANUEL RIVERA SILVA.

AGUSTIN MERCADO ALARCON.

JOSE LUIS GUTIERREZ GUTIERREZ.

RAFAEL RODRIGUEZ VILLERAS.

JOSE RIVERA PEREZ CAMPOS.

ENRIQUE MARTINEZ ULLOA.

JOSE CASTRO ESTRADA.

ALFONSO GUZMAN NEYRA.

ADALBERTO PADILLA ASCENCIO.

MA. CRISTINA SALMORAN DE TA  
MAIO.

MANUEL YANEZ RUIZ.

RAMON CANEDO ALDRETE.

- 24 -

LOS MINISTROS

  
PEDRO GUERRERO MARTÍNEZ.

  
ANGEL CARVAJAL.

EL SRIO. GENERAL DE ACUERDOS

  
RAUL CUEVAS M.

La presente hoja corresponde al toea número 8963/944,  
relativo al juicio de amparo en revisión promovido por Sa-  
balo Transportation Co., S. A., contra actos del Congreso-  
de la Unión y otras autoridades.